

mo de 31 de Enero de 1870, los exige el pago de trece pesos doce centavos por derecho de mercado correspondiente á veintiun bultos de mercancías nacionalizadas en Guaymas, que importó el pailebot nacional "Colon," y consignados á los promoventes, quienes alegan que con tal acto se ataca por dicho tesorero la fraccion 1ª del artículo 112 de la Constitucion general; invadiendo por consiguiente facultades propias solo de la autoridad federal.

Visto el parecer fiscal y las demas constancias de autos.

Considerando: que aun cuando los Estados de la federacion en uso de su soberanía, puedan dictar leyes para su régimen interior, tienen que sujetarse á las prescripciones constitucionales; y que en el presente caso, el gobierno de Sinaloa al expedir su decreto de 31 de Enero de 1870, imponiendo un derecho llamado de mercado á los efectos nacionalizados en otros Estados al introducirse al de Sinaloa, sin permiso del Congreso general, ha hecho una violacion expresa de las garantías consignadas por los peticionarios; se decreta: que por sus prolegales fundamentos es de confirmarse y se confirma el fallo del juez de Distrito de Sinaloa que, en nombre de los poderes de la Union declara: que la justicia federal ampara y protege á los señores F. de la Vega y compañía contra la providencia del C. tesorero general del Estado que los obliga á pagar trece pesos doce centavos por derechos de mercado, correspondiente á veintiun bultos de efectos extranjeros nacionalizados en Guaymas y que importó á ese puerto el pailebot nacional "Colon"

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de que proceden con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron al tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada*

—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*
—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre veintitres de mil ochocientos setenta y uno. *Lic. Agustín Peralta*. Oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Michoacan por Tiburcio Mejía, contra el procedimiento del C. prefecto de Tacámbaro, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

D. Tiburcio Mejía se queja á ese juzgado de que estando preso en la cárcel de Tacámbaro, á disposicion del juez de 1ª instancia del mismo lugar, quien le instruye una causa por heridas, se le remitió violentamente á la cárcel de esta ciudad sin dárselo á conocer el motivo que determinó tal providencia, que en concepto del quejoso no puede ser otro sino un nuevo delito que se le atribuye, y en tal supuesto cree violada la garantía que estableció el art. 19 de la Constitucion general en su primera parte, puesto que no se le ha notificado el auto motivado de prision, sin embargo de haber trascurrido los tres dias que es el término mayor que puede durar la detencion, ó una medida dictada por vía de seguridad de cárcel, y en tal caso considera violadas las garantías que otorga la parte final del mismo art. 19, las fracciones 3ª y 4ª del 20 y la 1ª del 21, y en consecuencia pide que la justicia federal lo ampare en el goce de las garantías que respectivamente se hayan violado, segun que la causa que determinó el cambio de cárcel sea

una de las dos indicadas, y que se suspenda el acto anticonstitucional.

Como en su solicitud no expresa Mejía contra qué autoridad dirige su queja, por auto de 2 del pasado se le previno la determinase, y en virtud de tal prescripción, el quejoso dijo: que se quejaba del juez de letras de Tacámbaro; á quien por lo mismo se pidió, conforme al art. 5º el informe respectivo.

En tal estado el negocio, se presenta de nuevo Mejía, manifestando que por una equivocación había designado al juez de letras de Tacámbaro como responsable del acto reclamado, no siéndolo sino el C. prefecto de aquel Distrito, y en virtud de tal rectificación se repuso el expediente al estado que tenía el 2 de Agosto, y se pidió á este funcionario el informe que se había dispuesto diese el juez de Tacámbaro. Evacuado el informe se oyó al ministerio fiscal que pidió la suspensión del acto, y de conformidad con ese pedimento el juzgado, por auto de 26 del mes próximo pasado, mandó suspender los efectos de la providencia que se dice dictada por el prefecto de Tacámbaro á donde se dispuso volviese el reo, y se pide de nuevo á este funcionario informe con justificación sobre lo principal, remitiéndole al efecto copia del escrito del quejoso.

La prefectura de Tacámbaro no ha hecho mas que repetir el informe que ya tenía dado y acompañar copia certificada de un oficio que con fecha 25 de Julio anterior le dirigió el juzgado de 1ª instancia de la misma ciudad; y no faltando otra diligencia, se ha pasado el expediente á este ministerio fiscal para que pida sobre lo principal.

En el oficio del C. juez de letras de Tacámbaro, de cuya copia se acaba de hacer relación, consta, que esta autoridad temiendo que D. Tiburcio Mejía se evadiese de la cárcel que no consideró suficientemente segura, lo puso á disposición del C. prefecto para que lo remitiese á la cárcel de esta

capital, recomendándolo directamente al gobierno del Estado. El C. prefecto, según dice en su informe, practicó una averiguación para cerciorarse de la certeza de los hechos en que el juzgado de 1ª instancia apoya los temores de una evasión; y encontrando ser estos fundados, mandó en efecto al reo á esta ciudad, dejándolo siempre á disposición del juez que conoce de su causa.

En concepto de este ministerio, atenta la consignación que el C. juez de 1ª instancia hizo al prefecto, del reo D. Tiburcio Mejía para su traslación á la cárcel de esta ciudad, la prefectura de Tacámbaro, no es responsable de esa traslación, porque al ejecutarla no hizo mas que prestar á la autoridad judicial, como era de su deber, el auxilio necesario para que se cumpliera lo que había dispuesto, y así lo indica el mismo C. juez en el penúltimo párrafo de su informe, cuando dice: "Esta (la prefectura) se ha contraído al saber, lo que queda expuesto, á dictar las providencias que son de su resorte."

No es una objeción contra este concepto la frase que usó el repetido C. juez en el oficio que dirige á la prefectura cuando dice: que pone á su disposición á los reos "para que se sirva, si lo tiene á bien, remitirlos á la capital del Estado por seguridad de cárcel," porque esa frase "si lo tiene á bien," á juicio del promotor, es de mera urbanidad y no indica mas, sino que el prefecto de Tacámbaro no es inferior al juez de letras y es muy acostumbrada entre dos funcionarios de distinto orden.

Tampoco puede fundarse objeción en que el prefecto de Tacámbaro, según expone en su informe, haya procurado cerciorarse antes de remitir á Mejía, de la importancia de los motivos que determinaron al C. juez á decretar la traslación del reo, porque eso se explica perfectamente atendiendo á que estos motivos afectaban directamente al orden político, cuya conservación está á cargo de los prefectos, y es muy natural que teniendo noticia el de Tacámbaro de

que podia trastornarse aquel en su Distrito, procurase averiguar la certeza de la noticia.

Por todo lo expuesto y respetando siempre, como es debido, la opinion del C. promotor propietario, que fué quien pidió sobre la suspension del acto reclamado, y respetando tambien los fundamentos del auto en que se decretó la suspension, el que suscribe entiendo, que el C. prefecto de Tacámbaro no es responsable de la providencia de que se queja D. Tiburcio Mejía, y consiguientemente no cabe contra aquel funcionario el amparo solicitado por este, ni tampoco contra el juez de letras de Tacámbaro que es el responsable del acto reclamado, porque no se ha dirigido contra él la queja y porque en caso de que se le hubiera acusado, el amparo se pedirá contra una providencia dictada en negocio judicial en que aquel recurso no tiene lugar.

Por lo expuesto, el promotor pide á ese juzgado se sirva declarar que la justicia de la Union no ampara á D. Tiburcio Mejía en el goce de las garantías á que se refiere su escrito fecha 2 de Agosto, por no ser el C. prefecto de Tacámbaro responsable de la providencia con que el quejoso las considera violadas.

Morelia, nueve de Setiembre de mil ochocientos setenta y uno.—*M. Tórcida*.—Una rúbrica.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Octubre seis de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por Tiburcio Mejía contra el C. prefecto de Tacámbaro por haber remitido esta autoridad al quejoso á esta capital por seguridad de cárcel; el informe justificado de aquel funcionario; lo pedido por el ministerio público; la citacion para sentencia y cuanto mas se tuvo presente, y

Considerando: que el hecho que motiva

la queja es una providencia emanada de la autoridad judicial que conoce de la causa en heridas que sigue contra Mejía, la que el C. prefecto de Tacámbaro no tuvo mas participio que haber ejecutado, como era de su deber, la disposicion del juez de 1ª instancia, quien no creyendo segura la cárcel de aquella ciudad y temiendo una evasion, dispuso la traslacion de Mejía á esta capital: que este hecho está justificado con la copia del oficio del C. juez citado que obra en autos, y con el informe del mismo, resultando de aquí que no es responsable de este acto el C. prefecto, contra quien se ha dirigido la queja.

Considerando: que si por auto de 26 de Agosto se mandó suspender el acto reclamado, fué en virtud de que vacilando aún el quejoso en determinar la autoridad responsable, y siendo notoria la molestia ó gravamen que infería la providencia reclamada, bien se podía decretar su suspension sin perjuicio de continuarla ó revocarla, segun lo que apareciera de la secuela del juicio, y que resultando de este que el acto reclamado fué una providencia del órden judicial de la que no es responsable el C. prefecto, debiendo por lo mismo subsistir aquella, por que la queja no se ha dirigido contra el juez que la dictó, ni el recurso pudo intentarse contra ella por ser dictada en negocio judicial. Por tales razones y con fundamento de los artículos 1º 16 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869 y de conformidad con lo pedido por el C. promotor, se declara:

Primero: La justicia de la Union no ampara ni protege á D. Tiburcio Mejía, contra el C. prefecto de Tacámbaro, por no haber violado este en la persona de aquel, las garantías que otorgán los artículos 19, 20 y 21 de la Constitucion general.

Segundo: Se revoca el auto de 26 de Agosto último por el que se mandó suspender el acto reclamado, quedando en consecuencia la autoridad que lo dictó espedita para proceder como le convenga.

Tercero: No se condena á D. Tiburcio Mejía en la multa del artículo 16 de la ley orgánica citada, por su notoria insolven-
cia.

Cuarto: sáqueuse copias de este fallo y remítanse á quienes corresponda, dándose cuenta con las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Definitivamente juzgando lo decretó el C. juez de Distrito del Estado de Michoacan. doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—*Anto mí*.—*Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Octubre veinte de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Michoacan, por Tiburcio Mejía, contra el procedimiento del C. prefecto de Tacámbaro por el cual ordenó su traslacion á la cárcel de Morelia, alegando que con esta providencia se violan en su persona las garantías que otorgan los artículos 19, 20 y 21 de la Constitucion federal. Visto el informe que produjo el juez de 1ª instancia de Tacámbaro, autoridad contra cuyas disposiciones el quejoso dirigió primero su recurso; el informe del prefecto del mismo Distrito, contra cuyas medidas definitivamente se ha fijado; lo pedido por el promotor fiscal y las demas constancias de autos.

Considerando: que el prefecto de Tacámbaro ordenó la traslacion que reclama Mejía, á solicitud del juez de 1ª instancia que conoce de la causa que se instruye al mismo Mejía por heridas y golpes; que el juez al poner á disposicion del prefecto el mencionado rco, para el efecto expresado, obró en la órbita de sus atribuciones; que ambas autoridades son responsables de la seguridad de los presos; y que en el presente caso se juzgó indispensable la determinacion tomada con el quejoso por el amago que

habia de turbarse el Orden público y de que sublevase la prision, y que la traslacion expresada se dictó en calidad de provisional, no importando en virtud de todo lo dicho violacion alguna de las garantías invocadas por Mejía en su escrito de demanda. Por tales fundamentos y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del juez de Distrito de Michoacan pronunciada en Morelia á 6 del corriente mes en los términos siguientes:

La justicia de la Union no ampara ni protege á Tiburcio Mejía, contra la providencia del prefecto de Tacámbaro, en virtud de la cual fué trasladado de la cárcel de ese lugar á la de Morelia, por no haber

garantía violada.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de donde proceden, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada*.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arteaga*.—*J. M. Lafragua*.—*P. Ordaz*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. Azza*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramirez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.